

Michel Husson

Trabajar 39 horas, pagar 35

arian n° 37 - octubre 2002

Éste es el objetivo que busca el nuevo gobierno de derechas francés, a través del proyecto de ley presentado por Fillon, el Ministro de Trabajo. La gran paradoja de esta pretensión es que se apoya en las debilidades de la ley Aubry de las 35 horas y las políticas llevadas por sus predecesores. El primer punto concierne al salario mínimo. Éste es definido a nivel de jornada, sobre la base de una duración legal que ha pasado de 39 a 35 horas. Para mantener el poder adquisitivo mensual, sería necesario aumentarlo un 11,4%, lo que parecería paradójico a la izquierda plural. El gobierno de derechas coloca así un sistema de compensación muy complejo, instituyendo salarios mínimos diferentes según el año de conversión a las 35 horas. La derecha ha tomado como pretexto esta situación inextricable para la armonización hacia arriba, pero en detrimento de toda revalorización del salario mínimo durante tres años.

Por tanto, la nueva ley elimina las ayudas del paso a las 35 horas, convirtiéndose en una nueva baja de cotizaciones sociales, las cuales corren a cargo del erario público. Pero la segunda ley Aubry había suprimido cualquier condición sobre la creación de empleo cuando se pasara a las 35 horas. Se dio paso a todos los procesos de intensificación de los ritmos de trabajo para evitar los tampones proporcionales a la reducción del tiempo de trabajo. Una ley bien concebida hubiera hecho todo lo contrario, intentando suprimir las ayudas a las empresas que no respetaran esta exigencia en materia de empleo.

Una nueva vía de escape se ha dado a las empresas pequeñas de menos de 20 empleados. Las cuales tendrían derecho a un excedente de horas suplementarias que cubrirían sobradamente el paso a las 35 horas, mediante un 10% de costo suplementario, compensado, de hecho, por las ayudas públicas. Aquí, el gobierno actual vuelve a reclamar la dulcificación realizada por el gobierno anterior, el cual había renunciado a aplicar la ley de las 35 horas en las pequeñas empresas a partir del 1 de enero del 2002. Una verdadera ley para la reducción de jornada hubiera procedido de otro modo, limitando el recurso de las horas extras y volviendo su costo prohibitivo.

La trayectoria de la izquierda-liberal es patética. Después de haber asumido por su cuenta la gran idea de las 35 horas, la ha vaciado progresivamente de contenido. En vez de organizar un nuevo reparto de la riqueza, transformando las rentas financieras hacia las nuevas contrataciones, la izquierda plural ha pretendido llevar a cabo las 35 horas sin tocar las rentas. Las exigencias a los empresarios se han relajado progresivamente, de tal manera que éstos se han permitido todo en materia de flexibilidad. La congelación de salarios, agravada por la reducción de horas extras para ciertas categorías de asalariados; la intensificación del trabajo; la anulación de horarios, todo esto no ha incitado a una parte del electorado a movilizarse.

Pero a pesar de los aspectos negativos, las 35 horas han contribuido a mejorar la situación general del empleo. No hay pues que renunciar a este aspecto esencial de lucha contra el desempleo. La verdadera salida, tirando hacia arriba, consistiría en avanzar hacia las 32 horas, hacia la semana de 4 días. Pero este segundo empujón sólo vendrá a través de la lucha. La economía europea va a entrar en un periodo de desconcierto, con el aumento de los planes de reestructuración de plantillas. El rechazo hacia las reestructuraciones de plantilla, los cuales servirían para la consolidación de los beneficios, se debería articular con una lucha a favor del aumento salarial, ya que los sueldos están bloqueados en nombre de la reducción de jornada, la flexibilidad y la intensificación, supuestas para compensar el paso a las 35 horas. El gobierno y la patronal quieren negociar en bloque todos estos aspectos. Si lo logran, sería aun peor, pero van demasiado lejos jugando a aprendiz de brujo, y bien podrían provocar un amplio movimiento social en contra de dicha pretensión.